



TOCA NÚMERO: 286-A-1C01/2024.

1

Expediente número:  
**116/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla.**

Magistrada Ponente:  
**Lic. María Itzel Ballinas Barbosa.**

Secretaria de Estudio y Cuenta:  
**Lic. Evelin Yedid Martínez Hernández.**

**PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01, CERO UNO, TUXTLA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 9 NUEVE DE AGOSTO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.**

**V I S T O** para dictar sentencia en los autos del toca civil número **286-A-1C01/2024**, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por **\*\*\*\*\***, en contra del auto del **13 trece de mayo de 2024 dos mil veinticuatro**, dictado por la Juez Primero del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de **TUXTLA**, en el expediente número **116/2012**, relativo al **JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO** a bienes del extinto **\*\*\*\*\***, denunciado por **\*\*\*\*\***, de apellidos **\*\*\*\*\***; y,

### **R E S U L T A N D O:**

**1.-** En la fecha arriba señalada y dentro del procedimiento de referencia, el Juez del conocimiento dictó un auto que a continuación se transcribe:

*“JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL TUXTLA.- TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 13 TRECE DE MAYO DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.- - - -*

- - - Por presentado \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , con su escrito recibido el 13 trece de mayo del año en curso; mediante (sic) manifiesta la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al pago de honorarios del perito tercero en discordia; atento a su contenido se tienen por efectuadas las manifestaciones que hace valer en su escrito de cuenta, no obstante, se le dice que las reglas del procedimiento no se encuentran a criterio de las partes, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; aunado a que los intereses del presente juicio son de orden público e interés social, por lo que se conmina a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , a dar debido cumplimiento a lo señalado en auto de 24 veinticuatro de abril del año 2024 dos mil veinticuatro o en su caso manifieste si es su deseo adherirse al resultado de dictamen pericial presentado por con (sic) contraparte.--- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE..."-----

2.- Inconforme con el acuerdo dictado por la Juez del conocimiento, \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , interpuso recurso de apelación, formulando agravios en tiempo y forma, mismos que a continuación se transcriben:

**AGRAVIOS:**

**FUENTE DE AGRAVIO.-** Lo constituye el pronunciamiento hecho por el Juez natural (sic), en el auto recurrido de fecha **13 DE MAYO DEL 2024**, que en su parte total establece lo siguiente: (lo transcribe)

En ese sentido, se me dio vista del acuerdo emitido de fecha 23 de abril del 2024, el cual me fue notificado el 07 siete de mayo del mismo año, vista que contesté en tiempo y forma haciendo valer bajo protesta de decir verdad, que soy adulto mayor con una edad de mas (sic) de 87 años, y atendiendo a mi estado de longevidad **me encuentro desempleado y no percibo ningún ingreso**, lo que me impide disponer de la cantidad que se me ha fijado para el pago de los honorarios del perito tercero en discordia en materia de agrimensura OSCAR ROBLEDOS ZAVALETA, siendo que el monto que pretende cobrar es notoriamente elevado al costo de la prueba. Y no obstante ello se requiere a las partes realizar el depósito proporcional correspondiente de la cantidad de \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de honorarios a favor del citado perito tercero en discordia, designado por el Juzgador de origen, en el auto recurrido de fecha 01 de abril de 2024, para emitir el dictamen pericial que se le encomendó en agrimensura, por los motivos a que se contraen el desahogo de dicha prueba.

**AGRAVIO UNICO.**

Me causa perjuicio el auto recurrido, en virtud de que, en primer lugar el juez natural (sic), me concede el término de tres días para que haga pago proporcional de la cantidad de \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), de los gastos del perito tercero en discordia ingeniero Oscar Robledo Zabaleta

en materia de agrimensura, siendo que dicho término que me concede es muy reducido para efectuar dicho pago proporcional que me corresponde como parte litigante en el presente juicio; por ello atendiendo a mi imposibilidad para trabajar, además de que **dicha imposición no es asequible a mis condiciones económicas,** siendo que soy una persona que me encuentro protegida **por pertenecer a un grupo vulnerable por mi edad avanzada como ADULTO MAYOR,** ello implica la obligación del Estado, incluyendo la del órgano jurisdiccional en velar y suplir las deficiencias de mis planteamientos, con relación a mis derechos fundamentales, siendo que el juez natural, establece en el auto recurrido, **que las reglas del procedimiento no se encuentran a criterio de las partes** conforme a lo que establece el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; no obstante ello, **me conmina en forma ilegal a manifestar si es mi deseo adherirme al resultado del dictamen presentado por mi contraparte,** siendo que de autos consta que establecí una estrategia de defensa que se vé (sic) amenazada con el proceder del juez (sic) de los autos, **lo que notoriamente es ilegal,** ya que con su proceder nugatorio, desproporcional y discriminatorio, me coloca en un estado de indefensión notorio por cuanto a que además de prejuzgar la prueba pericial de mi contraria, **lo cual no se encuentra establecido en la ley procesal de la materia,** para que me adhiera (sic) al dictamen pericial rendido por mi contraria, solo por el hecho de no poder pagar al perito tercero en discordia, lo cual **si viola las normas del procedimiento a que hace referencia el artículo 55 de la ley procesal de la materia;** lo cual pone de manifiesto el notorio interés del juzgador (sic) de beneficiar a mi contraria, en cuanto a lo que se pretende probar con el desahogo de dicha prueba pericial, circunstancia que es contrario a mis derechos fundamentales que consagra la Constitución y los tratados internacionales; siendo que existen peritos en la Fiscalía General del Estado, que están facultados para apoyar a las personas de escasos recursos como el suscrito y que el juez debió advertir en forma anticipada para desahogar dicha prueba.

Siendo que el costo del peritaje Tercero en Discordia, designado por el Juzgador (sic) de Primera Instancia, para emitir el dictamen pericial en materia de Agri mensura **deviene exorbitante e inasequible para el suscrito,** en los términos en que lo ordena el juzgador (sic) y por lo tanto el costo de dicha experticia es desproporcional y elevado a lo que es la materia de dicho peritaje.

Se dice lo anterior, toda vez que si bien es cierto el artículo 360 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas, refiere que los honorarios del Perito tercero en discordia debe ser cubierto el pago de sus honorarios por ambas partes litigantes, cierto lo es también que dicho numeral hace referencia a que **ese pago se debe hacer aun perjuicio de lo que disponga la resolución definitiva sobre la condenación en costas;**

Ahora bien, al establecerse los honorarios del perito tercero en discordia, autorizados por el juez (sic), de no ser asequibles y proporcionales definitivamente **vulnera el derecho de acceso a la justicia en mi perjuicio,** su gratuidad y la prohibición de costas judiciales previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto tales honorarios constituyen uno de los gastos o costos económicos que deben asumir las partes de manera ordinaria en la defensa de sus intereses dentro de un proceso judicial, cierto lo es también **que las condiciones personales del suscrito mi edad avanzada y mi falta de trabajo me deja en un notorio estado de indefensión** como ocurre en el particular, aun cuando **pueden verse resarcidos si obtuviera sentencia favorable;** sin embargo, con el proceder ilegal del juez natural me orilla tendenciosamente a tener en mi contra sentencia condenatoria, por cuanto a que me conmina a que en caso de no pagar, me estaré al peritaje de mi contraria; por lo cual, dicho gasto **puede considerarse un obstáculo al acceso a la jurisdicción,** además de ser una carga innecesaria al ejercicio de ese derecho fundamental; por ello para el suscrito y mis condiciones personales el pago de esos honorarios, pueden incluirse en la categoría de **costas judiciales prohibidas por el artículo 17 constitucional (sic),** en tanto que el servicio del perito tercero en discordia forma parte de la función jurisdiccional al ser nombrado por el propio juez (sic) que se relaciona directamente en el interés del suscrito de rendir íntegramente la prueba pericial ofrecida en el juicio, en cuyo desahogo ambas tienen participación, de modo que son éstas quienes deben retribuir pero de manera asequible y proporcional la actividad de ese experto, **quien acude al juicio como un tercero en auxilio del juez,** igual que ocurre con los testigos, aun cuando no sea un funcionario judicial, y sin embargo está autorizado en la lista de las personas que pueden fungir como Peritos ante los Órganos del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Aunado a ello, el (sic) gastos de peritos, son pagados previo convenio entre las partes y el perito; sin embargo, su liquidación como en toda resolución incluyendo lo relativo a los honorarios de los Peritos, **se realiza hasta en tanto el Órgano Jurisdiccional emita sentencia de fondo** en la cual definirá dicho pago y costas judiciales incluyendo los Peritos Oficiales o los nombrados por el juez. En ese sentido atendiendo a la cantidad que reclama el Perito tercero en discordia antes referido, le sea pagada la cantidad aludida por concepto de honorarios) (sic), es un pronunciamiento hecho por **el juzgador (sic) natural quien omitió realizar un análisis lógico jurídico, del costo referido por el perito, en el sentido de que es extremadamente elevado el precio de sus honorarios en atención al suscrito como parte litigante;** omisión destacada que pone de manifiesto que dicho perito tiene un deber cívico con el litigio y para lo que lo encomendó el juzgador, sin embargo, **ello no se traduce a una simple función profesional al libre arbitrio del precio de sus honorarios,** pero sí de autos consta que el reembolso de los servicios del Perito **SON NOTARIAMENTE**

**ELEVADOS Y DESPROPORCIONALES AL COSTO DE LA PRUEBA,** es obvio que el juzgador (sic) debe regular ese pedimento excesivo y desproporcional atendiendo a las reglas básicas sobre el costo de dicha experticia, sin que ello signifique descalificar al perito y no se dude de su buena fe para emitir su opinión, ya que es precisamente el juez (sic) quien lo nombró y por lo tanto, **es el propio juzgador (sic) quien debió prever sobre su pago, sin que ello signifique aceptar sin objeción alguna o permitir el costo solicitado por el perito, sin hacer algún señalamiento u oposición legal al respecto, siendo que es el propio Juez (sic) quien tiene facultades para revocar esa designación, si el Perito infringe con disposiciones o argumentos excesivos fuera de la ley para que se inhiba en caso de ser necesario del conocimiento del negocio si no se realiza un ejercicio de ponderación sobre sus honorarios.**

Porque **el Perito está también obligado a actuar con rectitud y probidad como auxiliar de la administración de justicia,** lo cual constituye una condición necesaria en su propósito funcional en el proceso, consistente en aportar su experiencia y conocimientos al juez para llegar a la verdad de los puntos litigiosos, cuando para ello se requiere de conocimientos especiales.

Cabe aclarar **que no se trata de una recusación en contra del perito, porque en dicho supuesto se debe a causas personales por una cuestión de parentesco, interés directo e indirecto en el pleito, ser socio, inquilino o arrendador inclusive amigo íntimo de cualquiera de las partes para que se abstenga de seguir conociendo del juicio;** sino que en el caso particular lo es el costo del peritaje que es notoriamente elevado como ya se dijo; **siendo que COMO REFERENCIA, según el Arancel para Peritos del Poder Judicial de la Federación, fluctúa el costo del peritaje en una cantidad menor a la que se requiere a las partes litigantes, lo cual omitió el juzgador (sic) de primer grado verificar.**

Es decir dicho perito, para justificar su costo omite mencionar **los instrumentos a utilizar** que le permitan detectar con precisión algún punto de su dictamen o si utiliza algún equipo sofisticado electrónico o su propio celular para estar en condiciones de rendir su dictamen sobre de lo que va a opinar, y que le permitirá **cobrar un importe mayor** y lograr un grado de confiabilidad de su dictamen. Lo cual pone de manifiesto lo elevado de sus honorarios y que no pueden escapar de la observación del juez (sic) **aunado a que la materia que es motivo del litigio es de naturaleza Civil y no Penal.**

Por lo que el costo de dicho peritaje **NO PUEDE TENER CERTIDUMBRE LEGAL DE SU VALOR ECONOMICO.** Además de que dicho arancel tiene disposiciones generales para realizar el cálculo de los honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos, **CON REGLAS MÁS ASEQUIBLES PARA LAS PARTES,** además de que debe existir un valor neto por cubrir respecto al importe que

resulte en una conversión en UMA a moneda nacional, más el impuesto al valor agregado, los cuales son fijos.

Por lo tanto, el costo del perito tercero en discordia en lo tocante a su dictamen **no puede ser injustificado**, pues debe precisar en forma desglosada la cantidad o cantidades de su apreciación, siendo que arancel es de aplicación en todo el territorio nacional, el cual esta (sic) valuado por lo que hace a emitir un dictamen pericial en materia de Agrimensura en UMA's (sic) como consta en el numeral DECIMO PRIMERO del CAPITULO 1 relativo a las DISPOSICIONES GENERALES de dicho arancel.

De lo anterior se advierte que el juez natural (sic), **ordenó nombrar diverso perito para asistirlo como el tercero en discordia, sin precisar su costo por la emisión de su dictamen.**

Por lo tanto, se irroga en perjuicio el proceder del juez (sic) en el auto recurrido respecto al contenido de los artículos 286 y 287 con relación al capítulo especial de la sección IV, de la prueba pericial visible en el capítulo cuarto de la recepción de pruebas en su ordinal 360 de la Ley Procesal Civil de la materia.

Así las cosas, con el medio de impugnación en comento, contravirtiendo el indebido proceder de la Juez de origen, resulta **procedente conforme a derecho MODIFICAR EL AUTO RECURRIDO para que se emita un dictamen por parte del perito tercero en discordia como un costo más asequible para las partes...**"

3.- Una vez admitido dicho recurso, la Juez natural dio vista a la parte contraria para que dentro del término de 3 tres días contestara los agravios transcritos en el resultando que antecede, habiéndolos contestado \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* mediante escrito de 4 cuatro de junio de 2024 dos mil veinticuatro.

4.- Con fecha 24 veinticuatro de junio de 2024 dos mil veinticuatro, la Ciudadana Magistrada licenciada CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA, Titular de la ponencia "C" de esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, propuso Dictamen donde se **EXCUSÓ** de conocer el presente recurso.

5.- La Presidencia de esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, en acuerdo de **27 veintisiete de**

**junio de 2024 dos mil veinticuatro**, tuvo por aceptada la excusa de referencia, suscrita por la licenciada CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA, Magistrada Titular de la Ponencia “C”; por lo que esta Sala Civil, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrados Licenciados GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES, Titular de la Ponencia “B”; MARÍA ITZEL BALLINAS BARBOSA, Titular de la Ponencia “A”; y licenciada CLAUDIA VIDAL HERNÁNDEZ, Secretaria General de Acuerdos fungiendo como Magistrada de la Ponencia “C” por Ministerio de Ley; asistidos del licenciado BROIS BONIFAZ DÍAZ, Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley; de igual manera, se formó el presente toca, se confirmó la calificación de grado y tuvo por interpuesto el recurso de apelación en **ambos efectos**, al no haber diligencias ni actuaciones pendientes de tramitar citó a las partes para oír resolución, ordenando traer los autos a la vista de la Magistrada ponente LICENCIADA MARÍA ITZEL BALLINAS BARBOSA, para dictar la Sentencia respectiva, para que sea puesta a consideración del pleno.

### **C O N S I D E R A N D O :**

I.- Que esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado; es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 686-A, del Código de Procedimientos Civiles, 49 y 59 fracción I, del Código de Organización del Poder Judicial ambos del Estado de Chiapas, por impugnarse una resolución de un juzgado de primera instancia ubicado dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción esta Sala Civil.

II.- Con lo dispuesto en el artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, el recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior.

III.- El único agravio expresado por \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , parte actora en el juicio de origen, en contra del Auto del trece de mayo del año 2024 dos mil veinticuatro, se estudian en la forma en que fueron planteados, como a continuación se establece.

En **lo que refiere de su agravio**, el apelante en esencia manifiesta que le causa molestia el auto de 13 trece de mayo del año 2024 dos mil veinticuatro, en virtud que el juez le otorgó un término de tres días para que haga pago proporcional de la cantidad de \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), de los gastos del perito tercero en discordia ingeniero Oscar Robledo Zabaleta en materia de agrimensura, siendo que dicho término que se le concedió fue muy reducido para efectuar tal pago proporcional que le corresponde como parte litigante en el presente juicio; por ello atendiendo a su imposibilidad para trabajar, además que dicha imposición no está en sus posibilidades económicas, tomando en cuenta que es una persona de la tercera edad, considerado como adulto mayor, por lo tanto resulta infundado su agravio.

En razón a lo antes expuesto, esta autoridad de Alzada consideran **infundado su agravio**, como se precisó en líneas que anteceden en virtud, que contrario a lo aseverado por el inconforme, se advierte que la juez si entra al fondo de la cuestión planteada, pues basta remitirse al auto recurrido para percatarse

que la juzgadora no le concedió su petición de exonerarlo de los honorarios del perito tercero en discordia, tomando en cuenta que en el proveído del 01 uno y 24 veinticuatro de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, la A quo les hizo saber sobre los honorarios del perito tercero en discordia el cual sería la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional), de las cuales ambas partes tenían que cubrir el 50% cincuenta por ciento cada una de las partes, como lo establece el artículo 360 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Chiapas, que dice lo siguiente:

***“Artículo 360.- El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombró, o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez, y el del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que disponga la resolución definitiva sobre condenación en costas.”***

De lo que se colige que la función del perito tercero en discordia en los juicios civiles es proporcionar un dictamen más al procedimiento con la finalidad de que el Juez tenga mayores elementos para decidir cuál es la realidad científica del problema planteado, por lo que en el caso que nos ocupa, es evidente que para la realización de la prueba pericial que solicita el albacea de la presente sucesión intestamentaria a bienes de los extintos

\*\*\*\*\* Y RAFAEL \*\*\*\*\* O \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*; era necesario contar con la experticia de un perito tercero en discordia.

Por otra parte, la Ley es muy precisa respecto al pago de los honorarios de los peritos, señala que serán pagados por la parte que lo ofrece y si el juez nombra a un perito en rebeldía, en éste caso, también los gastos correrán a cargo de la parte que no lo hubiere ofrecido, razón por la cual, al ser un perito que le corresponde a la parte que no lo ofreció, tiene que cubrir sus

honorarios, por disposición expresa del artículo 360 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas.

Resulta ilustrativa la Tesis Aislada:

**“HONORARIOS DEL PERITO TERCERO EN DISCORDIA. EL ARTÍCULO 1255 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE ESTABLECE SU PAGO, NO VULNERA EL DERECHO A LA JUSTICIA, SU GRATUIDAD, NI LA PROHIBICIÓN DE COSTAS JUDICIALES.”** El precepto citado, al establecer que los honorarios del perito tercero en discordia, autorizados por el juez, serán cubiertos por ambas partes en igual proporción, no vulnera el derecho de acceso a la justicia, su gratuidad ni la prohibición de costas judiciales previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tales honorarios constituyen uno de los gastos o costos económicos que deben asumir las partes de manera ordinaria en la defensa de sus intereses dentro de un proceso judicial mercantil, como ocurre también con la generación de copias, la obtención de documentos originales, el traslado de testigos, los honorarios de abogado, la remuneración al depositario de bienes, la publicación de edictos, entre otros, y de los que eventualmente pueden verse resarcidos si obtienen sentencia condenatoria en costas a su favor; por lo cual dicho gasto no puede considerarse un obstáculo al acceso a la jurisdicción sino como una carga necesaria e inherente al ejercicio de ese derecho fundamental; y sin que el pago de esos honorarios pueda incluirse en la categoría de costas judiciales prohibidas por el artículo 17 constitucional, en tanto que el servicio del perito tercero en discordia no forma parte de la función jurisdiccional prestada por el Estado, sino que se relaciona directamente con el interés de las partes de rendir íntegramente la prueba pericial ofrecida en el juicio, en cuyo desahogo ambas tienen participación, de modo que son éstas quienes deben retribuir la actividad de ese experto, quien acude al juicio como un tercero en auxilio del juez, igual que ocurre con los testigos, y no como un funcionario judicial.”

Por lo tanto, el servicio del perito tercero en discordia no forma parte de la función jurisdiccional prestada por el Estado, sino que se relaciona directamente con el interés de las partes de rendir íntegramente la prueba pericial ofrecida en el juicio, en cuyo desahogo ambas tienen participación, de modo que son éstas quienes deben retribuir la actividad de ese experto, quien

acude al juicio como un tercero en auxilio del Juez, igual que ocurre con los testigos.

En razón a lo expuesto, por ello la Juzgadora en los acuerdos de fecha 01 uno y 24 veinticuatro de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, se reitera les hizo saber que tenían que realizar el pago del perito por ambas partes siendo el 50% cincuenta por ciento cada uno, como lo establece el artículo 360 del Código Adjetivo Civil del Estado de Chiapas, por lo que a las partes les concedió el término de tres días, contados a partir al día siguiente que sean notificados, para realizar el pago correspondiente, apercibiéndolos en caso de no realizarlo en el plazo concedido, serian acreedores a una multa por la cantidad de 30 treinta Unidades de Medida y Actualización, que ascienden a la cantidad de \$3,257.10 (tres mil doscientos cincuenta y siete pesos 10/100 moneda nacional), sin perjuicio de poder aplicar diversas medidas de apremio que contempla el artículo 73 de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Chiapas. Por lo que la Juzgadora en ningún momento violentó sus derechos constitucionales, tan es así que por conducto del actuario judicial le notificaron al apelante, como se desprende de la razón actuarial de 08 ocho de mayo del año 2024 dos mil veinticuatro, donde le dieron a conocer el proveído de 24 veinticuatro de abril de la presente anualidad, por lo que el recurrente pudo hacer valer sus derechos y recurrir dichos acuerdos.

En efecto a lo anterior, es preciso dejar en claro que el recurrente hace referencias a anomalías que fueron derivadas de los diversos autos de 01 uno y 24 veinticuatro de abril del año 2024 del dos mil veinticuatro, por lo que analizadas las constancias procesales que obran en autos cuyo valor probatorio tienen conforme al numeral 400 de la Ley Adjetiva

Civil del Estado de Chiapas, es de señalar que resulta infundado el agravio expuesto, porque tales inconformidades debieron hacerse valer y apelando el auto de 21 veintiuno de abril del 2024 dos mil veinticuatro, en el que se interpone el apercibimiento, y no el auto que le niega su petición; por tal motivo la recurrente consintió el acto.

Bajo esa óptica, y retomando lo expresado en líneas precedentes de que un acto de autoridad judicial se considera consentido, cuando la parte que le causa perjuicio no la impugna en su momento oportuno, o bien, hace valer un recurso no idóneo, es decir, hace valer un recurso equívoco; por lo tanto, en la especie, al no hacer valer ninguna inconformidad en contra del auto de 24 veinticuatro de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, existe claramente acto consentido.

Para fortalecer lo antes motivado, cobra aplicación la Tesis Aislada bajo Registro número 232527, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal, en Materia Común, de la Séptima Época, Visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, que instituye:

***“ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL.*** La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.”

Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia bajo Registro número 176608, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de la Novena Época, Tomo

XXII, Diciembre de 2005, Visible en la página 2365, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del epígrafe siguiente:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”***

Bajo ese contexto, quienes ahora resuelven arriban a la conclusión que, el recurso de apelación admitido a trámite debe declararse **INFUNDADO**.

Sin que sea óbice, la circunstancia que por auto de presidencia se hubiese admitido, ya que dicha resolución no causa estado, pues además de no ser un acuerdo colegiado, deriva de un examen preliminar que no obliga a este Tribunal a resolver el presente recurso cuando actúa colegiadamente; toda vez que, dada la naturaleza de los mismos, son simples determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento de impugnación para que finalmente se pronuncie la resolución definitiva correspondiente; de ahí que dichos autos no causan estado.

Para fortalecer lo antes motivado, es menester aplicar la Jurisprudencia número I.6o.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 85, Enero de 1995, página 67, del rubro y texto siguiente:

**“AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO, POR SER DETERMINACIONES DE TRAMITE.** Los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, por lo que, si se admite un recurso, que conforme a la ley no debía admitirse, por ser improcedente, el tribunal no está obligado a respetar ese acuerdo si del estudio del medio de defensa y de las constancias de autos se advierte que, es contrario a la ley o a la jurisprudencia.”

De igual forma, deviene aplicable la Jurisprudencia I.5o.T. J/16, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Común del Primer Circuito, de la Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, visible a página 672, del Semanario Judicial de la Federación, que reza:

**“AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO.** Toda vez que en los autos de Presidencia se emiten simples determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento para que finalmente se pronuncie la resolución definitiva procedente, los mismos no causan estado.”

Por lo expuesto, motivado y fundado, esta Sala.

**R E S U E L V E :**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** el auto de **13 trece de mayo del año 2024 dos mil veinticuatro**, dictado por la Juez Primero de lo Familiar de éste Distrito Judicial de **TUXTLA**, en el expediente número **116/2012**, relativo al **JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO de los extintos \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***  
**Y RAFAEL \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* O \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\***.

**SEGUNDO:** Mediante oficio remítase copias certificadas de la presente resolución a la Juez Natural, para su conocimiento y efectos legales correspondientes;

oportunamente archívese el presente toca como asunto concluido.

**TERCERO:** Notifíquese y cúmplase.

Así lo resolvieron los Ciudadanos Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Licenciados GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES, MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA, y la Licenciada CLAUDIA VIDAL HERNÁNDEZ, Secretaria General de Acuerdos en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, en atención a la **excusa** planteada por la Magistrada CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, y firman ante el licenciado BROIS BONIFAZ DÍAZ, Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley, que da fe.

MIBB/EYMH/jam.

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

LIC. GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES

**MAGISTRADA PONENCIA "A"**

LIC. MARIA ITZEL BALLINAS BARBOSA

**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS  
EN FUNCIONES DE MAGISTRADA PONENCIA "C"**

LIC. CLAUDIA VIDAL HERNANDEZ.

**SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES  
DE SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**

LIC. BROIS BONIFAZ DÍAZ.

**ELIMINADO: 18 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. MOTIVO: se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.**